

# MILES DE PERSONAS EVOCAN EN VITORIA A LOS OBREROS QUE LA POLICÍA MATÓ HACE 37 AÑOS

Pol Pareja

“Aquello parecía la guerra”. Andoni Txasko, de 57 años, tenía 20 cuando perdió un ojo por culpa de una paliza que le propinó la Policía Armada durante los conocidos como sucesos de Vitoria. Ayer, 37 años después de aquello, recorrió las calles de la capital alavesa junto a unos 5.000 ciudadanos para recordar a los trabajadores que murieron y a las más de 100 personas que resultaron heridas, la mayoría de bala, a causa de los disparos efectuados por los grises al desalojar una iglesia en la que se celebraba una asamblea de trabajadores.

Eran tiempos muy convulsos en una España gris. Una España en la que, a pesar de que hacía ya unos meses que había fallecido el dictador Francisco Franco, no existían libertades ni derechos de reunión, huelga o manifestación. Una España en la que todavía no había oficialmente más sindicatos que el sindicato vertical, pero en la que los trabajadores se empezaban a organizar para reclamar sus derechos. La España del “la calle es mía”, pronunciado por Manuel Fraga, en esas fechas ministro de Gobernación.

Dos paros durante el mes de febrero habían precedido a la huelga general de ese 3 de marzo de 1976. Aquel día, el paro fue secundado por la práctica totalidad de trabajadores, así como por comercios, servicios, estudiantes, amas de casa y “la ciudadanía en general”, como recuerda Txasko.

Según recuerda este vitoriano, la represión policial fue muy dura durante la mañana. “Se palpaba en el ambiente el ánimo de masacrar”, cuenta. “Ya en las marchas desde las fábricas al centro de Vitoria hubo los primeros heridos de bala”. La Policía Armada estuvo toda la mañana vaciando y registrando iglesias, punto de reunión de los trabajadores, ya que las empresas estaban cerradas. Por la tarde se había convocado una asamblea valorativa de la huelga general en la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga. “La policía dejó que se llenara el templo y luego empezó a rodearlo”, recuerda Txasko, que no pudo acceder y lo presenció todo desde fuera. “Los policías hablaron con el cura para desalojar la iglesia, a lo que él se negó porque la gente estaba reunida tranquilamente en su interior”, explica.

Eva Barroso solo tenía 7 años ese día, pero lo recuerda como si fuera ayer. Su hermano Romualdo, de 19 años, fue uno de los cinco abatidos por la Policía Armada. “Fue un goteo de mal presagio”, recuerda hoy por teléfono. “Se hacían las ocho, las nueve, las 10 de la noche... iban volviendo todos los jóvenes, menos mi hermano”. Su padre decidió entonces buscar en todos los hospitales hasta que en uno de ellos halló el cadáver de su hijo, destrozado. “Tengo grabada la imagen de mi madre llorando y gritando: ‘Mi hijito, me lo han matado’”.

El acto celebrado se enmarca dentro del recuerdo a las víctimas, pero también en la reivindicación de justicia y de un mayor reconocimiento para los afectados. Nadie ha pagado por los asesinatos de ese día. Se abrieron diversos sumarios y el asunto recorrió varios juzgados para acabar finalmente en la jurisdicción militar, que reconoció los hechos como constitutivos de un delito de homicidio pero dictó el sobreseimiento del caso “al no tener evidencias para acusar a personas determinadas”.

Los familiares de Pedro María Martínez Ocio, trabajador de Forjas Alavesas, de 27 años; Francisco Aznar Clemente, operario de panaderías y estudiante, de 17 años; Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator, de 19 años; José Castillo, de Basa, una sociedad del Grupo Arregui, de 32 años; y Bienvenido Pereda, trabajador de Grupos Diferenciales, de 30 años, no cobraron hasta 2008 ni un euro de indemnización. 31 años después, cuando consiguieron que les amparara la ley de memoria histórica tras lustros de reclamaciones.

Andoni Txasko, que quedó incapacitado por culpa de la paliza que le quitó el único ojo con el que veía —el otro lo tenía previamente lesionado—, tampoco vio reconocido su estatus de víctima hasta 2008. “El olvido y el silencio al que nos hemos visto sometidos equivale al desprecio”, dice.

Los afectados, agrupados en la Asociación 3 de Marzo, no cejan en su lucha para que alguien pague por esos hechos. Este mismo año han solicitado al Gobierno que reconozca el dolor causado, pero aún no han recibido respuesta.